

Santiago, veintidós de abril dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

Por sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en los autos RIT O-714-2023, se acogió parcialmente la demanda deducida y se condenó a la demandada al pago de recargo legal y la devolución de \$3.536.191 por concepto de descuento de aporte patronal al seguro de cesantía. Lo anterior más los reajustes e intereses legales que correspondan, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, estableciéndose que cada parte pagará sus costas.

En contra de este fallo recurrió de nulidad la parte demandada y fundamenta su recurso en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley, en relación al artículo 13 de la Ley N° 19.728.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia respectiva, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

**Considerando:**

**Primero:** Que la parte demandada funda su recurso en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, por haberse dictado la sentencia definitiva con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, con relación al artículo 13 de la Ley N° 19.728.

Argumenta que si se hubiese aplicado correctamente esta norma no se habría acogido la solicitud de restitución del aporte del empleador al seguro de cesantía, puesto que no es un requisito para proceder a este descuento que el despido practicado al demandante sea necesariamente justificado. Como consecuencia de dicha infracción se ha desconocido el derecho a su representado de descontar de la indemnización por años de servicios los montos aportados a la cuenta individual de cesantía de la extrabajadora.

**Segundo:** Que de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo, será procedente el recurso de nulidad cuando la sentencia definitiva se hubiere dictado con



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LGJYXNTFXVB

infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En términos simples la causal de nulidad señalada resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia y ello puede tener lugar, en primer término, en los casos de contravención formal de la ley, o sea, aquéllos en que el fallo prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso. En segundo, en los casos de errónea interpretación de la ley, esto es, cuando la sentencia da al precepto legal un alcance diverso a aquel que debía haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación de la ley que se establecen en los artículos 19 a 24 del Código Civil, y por último en los casos en que hay falsa aplicación de la ley, defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o cuando la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado.

Asimismo, la causal supone por consiguiente que los hechos fijados en el fallo del tribunal a quo resultan inamovibles -salvo denuncia por infracción a las normas reguladoras de la prueba, que no viene al caso-, de modo tal que los supuestos de procedencia del recurso deberán referirse única y exclusivamente al derecho aplicable.

**Tercero:** Que para resolver el recurso interpuesto debe considerarse, en primer término, que el despido de la demandante se produjo por aplicación de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa y que tal decisión resultó improcedente, conforme lo determinó el fallo del tribunal *a quo* en una decisión que no fue impugnada.

En segundo lugar, también es relevante considerar que el empleador descontó de las indemnizaciones legales lo aportado por su parte al fondo de cesantía.

Ahora bien, el error de derecho que se atribuye al fallo consiste en haber ordenado la devolución de lo descontado por concepto de aporte al seguro de cesantía efectuado por el empleador, en razón que el despido por necesidades de la empresa ha sido declarado improcedente.



**Cuarto:** Que el seguro obligatorio que consagra la Ley N° 19.728 persigue atenuar los efectos de la cesantía y de la inestabilidad en el empleo, estableciendo un sistema de ahorro obligatorio sobre la base de la instauración de cuentas individuales por cesantía -conformado por cotizaciones mensuales del empleador y del trabajador-, y la creación de un fondo de cesantía solidario que opera como uno de reparto, complementario al referido sistema de cuentas, que se financia con una fracción que aporta el empleador y otra que es de origen estatal.

Ahora bien, el artículo 13 de la ley aludida dispone que si el contrato termina por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios, agregando el inciso segundo que se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía.

**Quinto:** Que la regla del artículo 13 de la citada ley no es una norma que pueda ser tenida por “clara”, desde que ha sido objeto de interpretaciones divergentes, de manera que para dilucidar su alcance y sentido y proceder a su posterior aplicación se puede recurrir a la intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.

En tal contexto, cabe recordar que en el Mensaje -que diera origen a la actual Ley N° 19.728, Sobre Seguro de Desempleo-, se consignó que: “... Mediante el establecimiento del presente sistema, el trabajador logrará una mayor certeza en la percepción de los beneficios por cesantía, en el caso de las contingencias referidas. A su vez, el empleador verá transformada su actual responsabilidad única de indemnización, por otra en que se combina el pago de las cotizaciones previas con el pago directo de una prestación...”.

**Sexto:** Que la manifestación indicada resultó coherente con la regulación consensuada por los órganos colegisladores, dado que a través suyo se pretendieron morigerar los efectos de la cesantía e inestabilidad en el empleo. Para ese fin, se conjugó un esquema de ahorro obligatorio, sobre la base de Cuentas Individuales por Cesantía -conformado por cotizaciones mensuales del empleador y del trabajador- con la creación de un Fondo de Cesantía Solidario que opera como fondo de reparto, complementario al



sistema de cuentas individuales. A través de este sistema se propende al equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de un trabajador cesante (cuando el motivo del cese no da derecho a indemnización) y la carga económica que puede representar para un empleador el hecho del despido (cuando la causal de terminación trae aparejada, *per se*, la indemnización correlativa).

De esta forma, al tratarse de causales de despido que de acuerdo con el Código del Trabajo no dan derecho a indemnización por años de servicios, el seguro de cesantía actúa como indemnización a todo evento, puesto que, en tales casos, con la sola presentación de los antecedentes que den cuenta del término de la relación laboral, el trabajador tiene derecho a efectuar giros mensuales con cargo al fondo acumulado con las cotizaciones aportadas y su rentabilidad, incluidas las que haya realizado el empleador (artículos 14, 15 y 51). En los otros casos -que de suyo dan derecho a indemnización, esto es, las hipótesis del artículo 161 del Código del Trabajo-, el régimen de la Ley N° 19.728 mantiene subsistente la responsabilidad directa del empleador, de modo que éste debe pagar la indemnización legal pertinente. Sin embargo, a modo de equilibrar sus efectos, dicho empleador queda obligado a enterar únicamente la diferencia que se produzca entre el monto acumulado como resultado de su aporte en la Cuenta Individual por Cesantía y el equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicios y fracción superior a seis meses.

**Séptimo:** Que, así las cosas, siendo un hecho no discutido e inamovible que el contrato terminó por necesidades de la empresa, la declaración de improcedencia del mismo sólo trae como consecuencia la prevista legalmente, esto es, la aplicación del incremento del 30%. Por semejante razón, incurre en error de derecho el tribunal *a quo* al ordenar la restitución de lo descontado por el aporte del empleador por concepto de seguro de cesantía.

En tales condiciones y por configurarse el supuesto legal, el recurso de nulidad debe ser acogido.



Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se **acoge** el recurso de nulidad deducido por la parte demandada contra de la sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en los autos RIT O-714-2023, la cual se invalida en aquella parte que ordena la restitución del descuento del aporte patronal al seguro de cesantía y se la reemplaza por la que se dicta continuación y sin previa vista.

Acordada contra el voto del Ministro señor Aguilar, quien fue de opinión de rechazar el recurso interpuesto, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones:

1°.- Que el artículo 13 de la Ley N° 19.728 dispone que si el contrato termina por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios, agregando el inciso segundo que se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía.

Por su parte, el artículo 52 de la citada ley prescribe, en lo que interesa, que cuando el trabajador accionare por despido injustificado, indebido o improcedente, en conformidad al artículo 168 del Código del Trabajo, podrá disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individual por Cesantía, en la forma señalada en el artículo 15, a partir del mes siguiente al de la terminación de los servicios. Añade el inciso 2° que si el Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13.

Luego, según el artículo 54 del mismo cuerpo legal, las prestaciones establecidas en esta ley de cargo de los empleadores a favor de los trabajadores afiliados al Seguro, tendrán la calidad jurídica de indemnizaciones por años de servicio, para todos los efectos legales, y gozarán del privilegio establecido en el N° 8 del artículo 2472 del Código Civil.

Ahora bien, todos estos preceptos deben relacionarse con el artículo 168 del Código del Trabajo, que en su penúltimo inciso señala que si el juez establece que la aplicación de una o más de las causales de terminación del



contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores.

2°.- Que la materia de Derecho planteada en el presente recurso de nulidad ha sido resuelta de manera uniforme por la Corte Suprema, en el mismo sentido planteado por la recurrente, al conocer del recurso consagrado en el artículo 483 del Código del Trabajo.

En efecto, se ha sostenido por el Máximo Tribunal que es condición necesaria para que opere el referido descuento que el contrato de trabajo termine por las causales previstas en el artículo 161 del Código, aunque resulta insuficiente por sí sola, puesto que el afectado puede impugnar sus fundamentos, demandando la declaración de improcedencia del despido. Si esta pretensión es acogida por la judicatura, se priva de justificación a la decisión patronal, por supresión del antecedente que sirve de razón a la aplicación del inciso primero del artículo 13 de la Ley N° 19.728.

Ahora bien, tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía constituyen una consecuencia que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo y, por ello, si el término del contrato por necesidades de la empresa es declarado injustificado, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento real una de las causales descritas en el citado artículo 13.

Por lo anterior, mal podría aceptarse la imputación a la indemnización si lo que justifica ese efecto se declara indebido. Entenderlo de otra manera tendría como consecuencia la atribución de validez a una conducta antijurídica, logrando así una inconsistencia, puesto que el despido sería impropio, pero el descuento mantendría su eficacia.

3°.- Que el objetivo del legislador al establecer el citado inciso segundo del artículo 13 fue favorecer al empleador enfrentado a problemas en relación con la subsistencia de la empresa con una suerte de beneficio






cuando debe responder de las indemnizaciones previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo. Es por ello que, tratándose de una prerrogativa patronal, tiene un carácter excepcional y es de aplicación restrictiva, por lo que sólo procede si se configuran todos los presupuestos de esta última disposición, esto es, si el despido es consecuencia real de las necesidades de la empresa, que, estando plenamente comprobadas, hacen inevitable la separación de uno o más dependientes. De esta forma, cuando se declara judicialmente que tal decisión no fue demostrada y que la desvinculación, por tanto, tiene sustento en un propósito subjetivo, no es admisible la defensa que sostiene la continuidad de aquel derecho, puesto que la supresión de la causa que permite acceder al citado artículo 13 también afectará al efecto consecuente que depende de la validez del despido, pretensión que, por lo dicho, carece de sustento normativo, derivándose de todo lo anterior que la devolución dispuesta en el fallo impugnado resulta procedente.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra (s) señora Díaz Urtubia y de la disidencia, su autor

Laboral-Cobranza N° 2187-2023.

<div><div></div><div><div><b>Jaime Balmaceda Errázuriz</b></div><div>Ministro</div><div>Corte de Apelaciones</div><div>Veintidós de abril de dos mil veinticuatro</div><div>12:22 UTC-4</div></div></div> <div></div>	<div><div></div><div><div><b>Alejandro Claudio Aguilar Brevis</b></div><div>Ministro</div><div>Corte de Apelaciones</div><div>Veintidós de abril de dos mil veinticuatro</div><div>12:52 UTC-4</div></div></div> <div></div>
<div><div></div><div><div><b>Paola Cecilia Díaz Urtubia</b></div><div>Ministro(S)</div><div>Corte de Apelaciones</div><div>Veintidós de abril de dos mil veinticuatro</div><div>12:31 UTC-4</div></div></div> <div></div>	



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LGJYXNTFXVB

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jaime Balmaceda E., Alejandro Aguilar B. y Ministra Suplente Paola Cecilia Díaz U. Santiago, veintidos de abril de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintidos de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LGJYXNTFXVB



Santiago, veintidós de abril de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo se dicta la sentencia que sigue:

**Vistos:**

De la sentencia anulada se mantienen todos sus considerandos, con excepción del Undécimo.

Y teniendo además presente lo razonado en los motivos cuarto, quinto y sexto del fallo de nulidad que precede, el que se reproduce y al que cabe remitirse para evitar reiteraciones innecesarias; concurriendo los presupuestos fácticos que permiten imputar a la indemnización por años de servicio de la actora la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por la empleadora, no corresponde acceder a la restitución reclamada por la suma de \$3.536.191.

Por estas consideraciones, manteniéndose las declaraciones y prestaciones no afectadas por la nulidad y ordenadas pagar en el fallo reproducido, se declara que no se hace lugar a la devolución del descuento del aporte del empleador a la Administradora de Fondos de Cesantía.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Aguilar, conforme se dejó expresado en la sentencia de nulidad.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra (s) señora Díaz Urtubia.

Nº 2187-2023 Laboral-Cobranza.

<div></div> <div><b>Jaime Balmaceda Errázuriz</b> Ministro Corte de Apelaciones Veintidós de abril de dos mil veinticuatro 12:22 UTC-4</div> <div></div>	<div></div> <div><b>Alejandro Claudio Aguilar Brevis</b> Ministro Corte de Apelaciones Veintidós de abril de dos mil veinticuatro 12:52 UTC-4</div> <div></div>
<div></div> <div><b>Paola Cecilia Diaz Urtubia</b> Ministro(S) Corte de Apelaciones Veintidós de abril de dos mil veinticuatro 12:31 UTC-4</div> <div></div>	

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jaime Balmaceda E., Alejandro Aguilar B. y Ministra Suplente Paola Cecilia Díaz U. Santiago, veintidos de abril de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintidos de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWFLXNXFXVB